



Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Distr. general
5 de julio de 2017
Español
Original: francés

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

68º período de sesiones

23 de octubre a 17 de noviembre de 2017

Tema 4 del programa provisional

**Examen de los informes presentados por los Estados partes
en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer**

Lista de cuestiones y preguntas relativas al informe inicial y los informes periódicos segundo y tercero combinados de Mónaco

Adición

Respuestas de Mónaco*

[Fecha de recepción: 19 de junio de 2017]

Constitución y marco legislativo

1. En el informe se indica que, con arreglo a la legislación monegasca, los tratados y acuerdos internacionales firmados y ratificados por el Príncipe tienen precedencia sobre las leyes nacionales, pero no sobre la Constitución (párrs. 95 y 96). Asimismo, en el párrafo 98 del informe se afirma que, en virtud de la Real Orden núm. 96, de 16 de junio de 2005, la Convención tiene fuerza de ley. Sírvanse proporcionar ejemplos de la invocación directa de la Convención ante los tribunales monegascos. Proporcionen también información acerca de cómo el Estado parte está prestando atención prioritaria a la incorporación de todas las disposiciones de la Convención en su legislación nacional.

Invocación ante los tribunales monegascos

1. Después de su ratificación y publicación, los tratados internacionales son directamente aplicables en Mónaco, siempre que su contenido no sea contrario a la Constitución. Dichos tratados se incorporan en el derecho interno por medio de una real orden que tiene fuerza de ley.

Nota: El presente documento se publica únicamente en español, francés e inglés.

* El presente documento se publica sin revisión editorial.

17-11193X (S)



Se ruega reciclar



2. De ese modo, la Real Orden núm. 96, de 16 de junio de 2005, incorporó en el derecho interno la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada en Nueva York el 18 de diciembre de 1979. Además, en virtud de la Real Orden núm. 6.212, de 23 de diciembre de 2016, se incorporó en el derecho interno el Protocolo Facultativo de dicha Convención, que fue aprobado el 6 de octubre de 1999 y entró en vigor el 22 de diciembre de 2000.

3. Por lo tanto, esos instrumentos jurídicos internacionales relativos a la discriminación contra la mujer son parte integrante del derecho positivo de Mónaco y, en consecuencia, todo procesado puede invocarlos ante los tribunales monegascos. No obstante, no se tiene constancia de sentencias significativas a ese respecto desde la entrada en vigor de esos instrumentos.

Incorporación de la Convención en el derecho interno

4. En consonancia con su compromiso en materia de derechos humanos, el Principado de Mónaco vela por la aplicación efectiva de los instrumentos internacionales en los que es parte. En el informe nacional presentado en 2016 y en las respuestas que figuran en este documento se informa de las medidas adoptadas por las autoridades monegascas para asegurar el cumplimiento de la Convención.

2. El Estado parte ratificó la Convención formulando reservas a los artículos 7 b), 9, 16 1) e) y g) y 29 2). En el informe se señala que el Estado parte no descarta la posibilidad de retirar algunas de ellas en el futuro (párr. 83). Sírvanse indicar qué medidas se han adoptado, incluido el plazo, para retirarlas o restringir su alcance.

5. Algunas reservas se han formulado debido a las características específicas del Principado de Mónaco, por lo que no podrán ser retiradas. Ese es el caso, por ejemplo, de la reserva relativa a la sucesión al trono, que es un elemento fundamental del sistema institucional de Mónaco.

6. En cuanto a otras reservas o declaraciones, y teniendo en cuenta la evolución de la legislación nacional del país, no se descarta la posibilidad de realizar un estudio sobre su alcance.

7. A finales de 2016, la reserva al artículo 16¹, relativa a la elección del apellido, fue objeto de un estudio específico en el contexto de la aprobación de la Ley núm. 1.440, que modifica algunas disposiciones del Código Civil relativas al apellido e introduce la cuestión del reconocimiento del niño antes de su nacimiento.

8. Se proporcionará información sobre la posible retirada de la reserva durante el diálogo con el Comité que tendrá lugar en el último trimestre de 2017.

3. En el párrafo 104 del informe se afirma que el Estado parte aplica el principio de no discriminación enunciado en el artículo 17 de su Constitución: “Los monegascos son iguales ante la ley. No hay privilegios entre ellos”. Sírvanse indicar si la Constitución contiene una definición completa de la discriminación contra la mujer que abarque la discriminación directa y la indirecta, tanto en el ámbito público como privado, de conformidad con el artículo 1 de la Convención y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo). De no ser así, indiquen si el Estado parte prevé la inclusión de dicha definición en la Constitución o en otro instrumento legislativo apropiado.

¹ “El Principado de Mónaco no se considera obligado por el apartado g) del párrafo 1 del artículo 16 en lo relativo al derecho a elegir el apellido.”

9. El título III de la Constitución de 17 de diciembre de 1962 se denomina “Libertades y derechos fundamentales”. Este protege las libertades fundamentales de los monegascos, en particular la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, lo que incluye la igualdad entre los hombres y las mujeres (artículo 17).

10. Por lo tanto, aunque no se incluye una definición completa de la discriminación contra la mujer, los derechos civiles y políticos enunciados en la Constitución son iguales para los hombres y las mujeres.

11. Además, dicho principio se traduce particularmente en el derecho interno en la igualdad de acceso de las mujeres al mercado de trabajo, la igualdad en el acceso sin discriminación a la enseñanza, la igualdad en el ejercicio de las actividades profesionales, la igualdad con respecto a los derechos políticos y la igualdad en materia de nacionalidad.

4. Sírvanse proporcionar información respecto de todos los programas de formación sobre la Convención y su Protocolo Facultativo que se estén llevando a cabo dirigidos a los funcionarios, los policías, los agentes de las fuerzas del orden, los jueces, los abogados, los fiscales y otros agentes del sistema judicial. Sírvanse indicar si esas actividades de formación se organizan de forma sistemática o como requisito obligatorio.

Formación inicial del personal judicial y policial

12. La formación inicial del personal judicial y policial incluye las cuestiones relacionadas con los derechos humanos.

13. Así pues, se imparte un módulo sobre los distintos tipos de discriminación a los estudiantes que aspiran a ser agentes de policía en la Escuela de Policía de la Dirección de Seguridad Pública.

14. La judicatura del Principado de Mónaco está integrada por jueces monegascos y jueces franceses adscritos, formados todos ellos en la Escuela Nacional de la Magistratura sita en Bordeaux (Francia). Por lo tanto, los jueces monegascos, que se contratan mediante concursos, de acuerdo con un convenio entre la Dirección de Servicios Judiciales y la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia, reciben la formación inicial correspondiente a los aspirantes franceses a la carrera judicial. La formación teórica es exactamente idéntica (dirección de los estudios, conferencias, talleres y enseñanzas técnicas).

15. Sin embargo, la formación práctica de los aspirantes a jueces monegascos es un poco diferente (prácticas en los juzgados o en servicios e instituciones que participan en el funcionamiento del sistema judicial).

Formación continua del conjunto de funcionarios responsables de la aplicación de las leyes

16. Las autoridades de Mónaco llevan a cabo numerosas iniciativas de educación sobre los derechos humanos en el marco de la formación continua del conjunto de funcionarios y responsables de la aplicación de las leyes (jueces, Dirección de Seguridad Pública, profesionales del derecho y otros).

17. Además, la Dirección de Servicios Judiciales organiza periódicamente en Mónaco conferencias destinadas a concienciar a los agentes del poder judicial y a ampliar sus conocimientos.

18. Cabe citar como ejemplo una conferencia celebrada en diciembre de 2014, impartida por el Sr. Jean-François Renucci, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Sophia-Antipolis de Niza y especialista acreditado en la esfera de los

derechos humanos, cuyo título fue “La prohibición de las discriminaciones en el contexto del Convenio Europeo de los Derechos Humanos”.

Actividades de formación en el marco de la represión de determinados tipos de violencia

19. Por otra parte, en el marco de la aplicación de la Ley núm. 1.382, de 20 de julio de 2011, relativa a la prevención y la represión de determinados tipos de violencia, el Gobierno del Principado organizó actividades de formación para que las víctimas pudieran disponer de interlocutores cualificados y que los profesionales que trabajaban en este ámbito contaran con una formación óptima para poder proporcionar a las víctimas una asistencia de calidad y adaptada a su situación, teniendo en cuenta sus problemas psicológicos.

20. Hasta la fecha, la Dirección de Recursos Humanos y de Formación de la Función Pública ha organizado dos sesiones de formación. En ellas han participado asistentes sociales, educadores especializados, enfermeros escolares, médicos escolares, jueces, personal de la Dirección de los Servicios Judiciales, y agentes y oficiales de la policía judicial. Además, dos médicos del Servicio de Psiquiatría del Centro Hospitalario Princesa Grace han participado en un ciclo de formación sobre el tema de la violencia.

Formación en materia de riesgos psicosociales

21. Por último, cabe señalar que todo el personal directivo de la función pública encargado de tareas relacionadas con los recursos humanos ha participado en actividades de concienciación y formación a este respecto. En particular, se ha enseñado a esos profesionales a detectar los signos de posibles daños psicológicos entre sus colaboradores, así como los métodos que se pueden poner en práctica para proporcionarles ayuda.

Acceso a la justicia

5. Sírvanse informar sobre las medidas adoptadas para que las mujeres tomen conciencia de sus derechos y cómo hacerlos valer. Indiquen si existe un sistema de asistencia letrada para facilitar su acceso a la justicia y expliquen los requisitos necesarios para tener derecho a tal asistencia. Indiquen también si se ha puesto en marcha un programa de asistencia letrada especial para los grupos vulnerables de mujeres. Sírvanse facilitar al Comité datos sobre el número de denuncias de discriminación presentadas por mujeres al Alto Comisionado para la Protección de los Derechos, las Libertades y la Mediación desde su creación.

Concienciación de las mujeres sobre sus derechos y la manera de hacerlos valer

22. En el Principado de Mónaco se organizan habitualmente campañas de concienciación sobre los derechos humanos, algunas de las cuales están destinadas especialmente a las mujeres.

23. Como ejemplo, cabe citar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado en noviembre de 2016 y organizado conjuntamente por el Gobierno del Principado, el Consejo Nacional (Parlamento), el Alto Comisionado para la Protección de los Derechos, las Libertades y la Mediación, y diversas asociaciones.

24. La participación de Mónaco en dicha jornada consistió en:

- a) La organización de una conferencia abierta al público, con el título: “Contra los actos de violencia de género: todos movilizados”;
- b) Una campaña publicitaria destinada a concienciar a la población;
- c) El establecimiento de un servicio telefónico, con un único número de teléfono, anónimo y gratuito, para informar a las víctimas de la violencia doméstica;
- d) La creación de una página web de información dedicada a las víctimas de la violencia, incluida en el sitio web del Gobierno del Principado.

25. El Alto Comisionado para la Protección de los Derechos, las Libertades y la Mediación atiende a toda persona física o jurídica que considere que ha sido víctima de discriminación injustificada en el Principado. En el marco de esa misión, la competencia del Alto Comisionado abarca también al sector privado.

26. En el ejercicio de su función, dicha institución realiza actividades de concienciación sobre la lucha contra la discriminación. Véase el sitio web de la institución: <https://hautcommissariat.mc>.

Asistencia letrada

27. El propósito de la asistencia letrada es hacer posible que las personas físicas que carezcan de recursos suficientes puedan hacer valer sus derechos ante la justicia.

28. De manera excepcional, se puede conceder asistencia letrada a las personas jurídicas sin fines de lucro y con sede en el Principado, siempre que su actuación o situación se considere particularmente relacionada con el objeto del litigio y que dichas personas no estén en condiciones de hacer frente a las previsibles costas del proceso.

29. Se concede asistencia letrada en todos los tipos de asuntos jurídicos. En los juicios penales, solo se concede a la parte civil. En los accidentes de trabajo, la asistencia judicial es de pleno derecho, por lo que no es necesario presentar una solicitud.

30. La cuantía de los ingresos anuales que deben tener las personas que soliciten asistencia letrada es de un máximo de 20.000 euros. La oficina de asistencia letrada puede valorar dicho ingreso de referencia y establecer correcciones en función de las cargas específicas o familiares que pesen sobre el solicitante, basándose en los documentos presentados para justificar la solicitud.

31. En caso de urgencia, y cuando el litigio ponga en peligro las condiciones de vida básicas del solicitante, el presidente de la oficina de asistencia letrada puede conceder dicha asistencia de manera provisional, tras recibir una carta simple.

Casos examinados por el Alto Comisionado

32. En 2015 y 2016 se presentaron nueve denuncias de discriminación ante el Alto Comisionado para la Protección de los Derechos, las Libertades y la Mediación. Dichos expedientes hacían referencia a las siguientes cuestiones:

- a) Dos estaban relacionados con la religión;
- b) Dos, con la nacionalidad;
- c) Una, con la orientación sexual;
- d) Una, con la situación familiar;

e) Una, con la discapacidad.

33. El informe de las actividades realizadas por el Alto Comisionado en el período 2015-2016 se puede consultar en el sitio web de dicha institución.

Medidas especiales de carácter temporal

6. En el informe apenas se facilita información sobre el uso de medidas especiales de carácter temporal para acelerar el logro de la igualdad de facto de la mujer con respecto al hombre, de conformidad con el artículo 4 1) de la Convención y la recomendación general núm. 25 (2004) del Comité. Sírvanse proporcionar información actualizada acerca de si se han adoptado esas medidas, incluida la utilización de cuotas, para aumentar la representación de las mujeres y las niñas en todas las esferas regidas por la Convención.

34. Existen diferencias de trato que se basan en una discriminación positiva entre los hombres y las mujeres en el ámbito del empleo. En particular, la reglamentación es más favorable para las mujeres en las siguientes situaciones:

- a) El trabajo nocturno²;
- b) Los períodos de descanso diarios y entre dos jornadas de trabajo consecutivas³;
- c) Los permisos adicionales para el cuidado de los hijos⁴;
- d) La protección reforzada para trabajos pesados o peligrosos⁵.

35. Además, la Ley núm. 870, de 17 de julio de 1969, modificada por la Ley núm. 1.245, de 21 de diciembre de 2001, relativa al trabajo de las mujeres en caso de embarazo o de maternidad, contiene la siguiente disposición: ninguna trabajadora podrá ser despedida a partir del momento en que un médico certifique su embarazo ni durante los períodos de suspensión del contrato de trabajo a los que tenga derecho en virtud de la licencia de maternidad.

36. Por lo tanto, el Gobierno de Mónaco vela por que las mujeres reciban una protección social adecuada, especialmente para la conciliación de la vida privada y la vida profesional, sobre la base de medidas tales como las licencias de maternidad, los subsidios familiares, la flexibilidad y la ordenación del tiempo de trabajo⁶.

37. Además de los permisos para los períodos previos y posteriores al nacimiento, existen medidas legales que permiten que las trabajadoras suspendan su contrato de trabajo para ocuparse de la crianza de un hijo y tengan prioridad en su posterior reincorporación laboral.

38. Asimismo, la Ley núm. 994, de 5 de enero de 1977, permite la suspensión o la rescisión de un contrato de trabajo en caso de enfermedad de un hijo a cargo, de

² Artículo 11 del Decreto-ley núm. 677, de 2 de diciembre de 1959, sobre la duración del trabajo, en su forma modificada.

³ Artículos 10 y 12 del Decreto-ley núm. 677, de 2 de diciembre de 1959.

⁴ Artículo 4 bis de la Ley núm. 619, de 26 de julio de 1956, por la que se establece el régimen de vacaciones anuales retribuidas, en su forma modificada.

⁵ Orden Ministerial núm. 58-168, de 29 de mayo de 1958, sobre las medidas particulares de higiene y seguridad en el trabajo de las mujeres y los niños.

⁶ Entre los permisos para padres y madres con los que se trata de facilitar la conciliación de la vida familiar y profesional cabe destacar los siguientes:

- La licencia de maternidad con una duración mínima de 16 semanas (Ley núm. 870, de 17 de julio de 1969, relativa al trabajo de las mujeres en caso de embarazo o de maternidad, modificada por la Ley núm. 1.245, de 21 de diciembre de 2001);
- La licencia de paternidad (Ley núm. 1.309, de 29 de mayo de 2006); la licencia de adopción (Ley núm. 1.271, de 3 de julio de 2003).

modo que la madre o el padre asalariados puedan interrumpir el empleo para ocuparse de su hijo enfermo.

39. Existen guarderías colectivas y familiares a disposición de las madres que ejercen una actividad profesional.

40. La Ley núm. 1.275, de 22 de diciembre de 2003, estableció la posibilidad de trabajar a tiempo parcial en la función pública (cuestión que ya era posible en el sector privado) y, en junio de 2006, se aprobó una ley relativa al teletrabajo.

41. Por último, cabe precisar que los convenios en materia de seguridad social acordados con Francia e Italia permiten que las ciudadanas de esos países que ejercen una actividad profesional en el Principado de Mónaco reciban las prestaciones sociales y médicas que ofrecen las cajas de seguros monegascas, en las mismas condiciones que se ofrecen a las mujeres residentes en el Principado. También se ofrece a todos los trabajadores del Principado la posibilidad de escolarizar a sus hijos o de obtener una plaza de guardería infantil en Mónaco, siempre que haya plazas disponibles.

Mecanismos nacionales para la protección de las mujeres

7. El informe no menciona si se ha establecido un mecanismo nacional encargado de la aplicación de la Convención. Sírvanse indicar si el Estado parte ha establecido un mecanismo nacional eficaz con el mandato y la capacidad necesarios, tanto desde el punto de vista financiero como técnico, para aplicar la Convención. Sírvanse indicar qué iniciativas ha puesto en marcha el Estado parte con respecto a la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular de la meta 5.1. Proporcionen asimismo información sobre el sistema actual para la recopilación, el intercambio y el análisis de datos, desglosados por sexo y edad, relativos a todos los ámbitos abarcados por la Convención.

Aplicación de la Convención

42. Diversas entidades colaboran en la aplicación de los compromisos internacionales del Principado de Mónaco en materia de derechos humanos y, en particular, de los derechos de las mujeres.

43. En el Principado, la eficacia del trabajo en red se ve facilitada por:

a) La proximidad de los participantes, esto es, los Servicios del Gobierno del Principado, el sector judicial, el ayuntamiento, las Cajas Sociales de Mónaco, los servicios de salud (en particular, el Centro Hospitalario Princesa Grace, que es un centro público) y el sector asociativo;

b) En el caso de algunos servicios públicos, su reagrupación en un mismo departamento responsable: por ejemplo, el Departamento de Asuntos Sociales y de la Salud supervisa a las entidades del ámbito sanitario y social, así como a las que se ocupan de la protección social, el trabajo y el empleo.

44. Además, en el marco del Programa Gubernamental de Acción 2017, se señala expresamente que la aplicación de una política de solidaridad activa en favor de las poblaciones más débiles sigue siendo un eje prioritario de la acción gubernamental.

Recopilación de datos

45. Habida cuenta del reducido tamaño del territorio, en el Principado de Mónaco no hay un organismo dedicado exclusivamente a la recopilación de los datos relacionados con los derechos de las mujeres. No obstante, los distintos servicios pertinentes (Dirección de los Servicios Judiciales, Dirección de la Acción y la

Ayuda Social, Dirección de Seguridad Pública y otros) recopilan esos datos, algunos de los cuales son accesibles al público, si así se solicita.

46. Cabe destacar a este respecto el establecimiento, en 2011, del Instituto Monegasco de Estadística y Estudios Económicos, cuya misión es recopilar, interpretar y publicar, de la manera más completa posible, los datos más importantes de la actividad del Principado. No se descarta que, en el futuro, dicho organismo realice encuestas sobre temas específicos relacionados con los derechos humanos.

Estereotipos

8. En el informe se proporciona muy poca información sobre los esfuerzos realizados para eliminar los estereotipos discriminatorios sobre los roles y las responsabilidades del hombre y la mujer en la familia y en la sociedad. Sírvanse indicar qué medidas se han adoptado para combatir, modificar o eliminar las prácticas negativas y los estereotipos patriarcales que perjudican y discriminan a la mujer. Indiquen también si se prevé adoptar una estrategia global para eliminar los estereotipos de género relacionados con la mujer en general y en las escuelas, la familia y toda la sociedad.

47. La educación sobre los derechos humanos es uno de los ejes prioritarios de la política educativa de Mónaco. Es por ello que la Dirección de Educación Nacional lleva a cabo numerosos proyectos en los centros escolares del Principado, con el fin de alentar la reflexión de los alumnos sobre las conductas que promueven el respeto por uno mismo y por los demás, las prácticas de ayuda mutua y un mayor grado de responsabilidad por parte de los jóvenes.

48. En ese contexto, se organizan actividades de concienciación sobre todas las formas de discriminación, incluida la discriminación entre los hombres y las mujeres.

49. Desde hace dos años, se ha puesto en marcha una política activa de lucha contra el hostigamiento y el ciberacoso en el ámbito escolar. En ese marco, en el colegio Charles III se ha establecido un servicio de mediación escolar entre pares como experiencia piloto. Se concede a las cuestiones relacionadas con los estereotipos la máxima atención.

50. Además, en el Principado se realizan campañas de concienciación destinadas al público general sobre los derechos de las mujeres.

51. Cabe citar a ese respecto las acciones realizadas en noviembre de 2016 en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (véase la información detallada más adelante).

Violencia contra las mujeres

9. Sírvanse proporcionar datos actualizados relativos a la prevalencia de todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica, así como a las medidas adoptadas para prevenirla y combatirla, de conformidad con la recomendación general núm. 19 (1992) del Comité. Incluyan información sobre los servicios de apoyo de que disponen las mujeres y las niñas que son víctimas de la violencia por razón de género y sobre el número de enjuiciamientos, condenas y penas impuestas a los autores.

Concienciación sobre la lucha contra la violencia de género

52. El Departamento de Asuntos Sociales y de la Salud presta apoyo desde hace muchos años a una serie de iniciativas destinadas a promover nuevas relaciones de solidaridad familiar y prevenir la violencia doméstica, que incluyen actividades de

información y promoción de la mediación familiar dirigidas por profesionales especializados en esa esfera.

53. El 25 de noviembre de 2016, el Principado se adhirió a la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

54. La participación de Mónaco en esa jornada internacional se originó en una reflexión conjunta por parte del Gobierno del Principado, el Consejo Nacional, el Alto Comisionado para la Protección de los Derechos, las Libertades y la Mediación, y los grupos de asociaciones comprometidos con esta causa.

55. Se realizó una campaña publicitaria destinada a concienciar a la población. Dicha campaña utilizó el sitio web del Gobierno y los de las asociaciones, así como las redes sociales.

56. Además, se ha puesto en marcha un servicio telefónico, con un único número de teléfono (el 116.919), anónimo y gratuito, para informar a las víctimas de la violencia doméstica.

57. Asimismo, se ha creado una página web de información dedicada a las víctimas de la violencia en el sitio web del Gobierno del Principado (<http://service-public-particuliers.gouv.mc/Social-sante-et-famille/Action-sociale/Victimes-de-violences/Aides-aux-victimes-de-violences>).

58. En 2017, el Principado de Mónaco participará nuevamente en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

59. Paralelamente, el Principado de Mónaco ha puesto en marcha una campaña de formación, con el lema “acogida de las víctimas de la violencia”, destinada al personal de la función pública y al personal hospitalario.

Fortalecimiento del ordenamiento jurídico: la Ley núm. 1.382 relativa a la prevención y la represión de determinados tipos de violencia

60. La citada Ley, de fecha 20 de julio de 2011, fue promulgada con el objetivo de reforzar la protección de las mujeres, los niños y las personas con discapacidad.

61. El propósito de la Ley es la prevención y la represión de aquellos tipos de violencia que requieran o justifiquen modos de represión o de reparación específicos, o sanciones agravadas o adaptadas, debido a la especial vulnerabilidad de las personas que los sufren o a las situaciones en las que se cometen esos actos violentos.

62. En materia de represión en sentido estricto, la Ley ha perfeccionado el ordenamiento normativo interno para que abarque especialmente toda forma de violencia o de amenaza de violencia física, psicológica, sexual o económica dirigida en particular contra las mujeres. A fin de garantizar la eficacia de esa protección reforzada, se han establecido medidas especiales de prevención, protección y represión en el ordenamiento jurídico monegasco, que incluyen los “delitos de honor”, la mutilación sexual femenina, los matrimonios forzados, la violación conyugal y el acoso.

63. En todos los casos en que dichos actos se cometan entre cónyuges o personas que conviven o hayan convivido durante un largo período, la citada Ley núm. 1.382, de 20 de julio de 2011, establece la imposición de sanciones mucho más severas, equivalentes al doble o al máximo de la pena señalada para el mismo delito en el derecho común.

64. Además, se prevé un aumento adicional de la pena, cuando proceda, mediante la revocación de la remisión condicional de la pena o del régimen de libertad vigilada si el autor no cumple su obligación de reparación. Esta disposición se

aplica también a los autores de mutilaciones genitales femeninas, delitos de honor o violaciones en el ámbito conyugal o doméstico. Las nuevas disposiciones también se ocupan de la esclavitud doméstica y el hostigamiento.

65. En cuanto a la asistencia y la protección de las víctimas, el Gobierno del Principado ha establecido la posibilidad de que la autoridad judicial dicte órdenes específicas de protección. Además, la citada Ley confiere a la autoridad judicial la posibilidad de dictar contra los autores del delito, bajo pena de prisión de 1 a 6 meses y una multa de 9.000 a 18.000 euros:

a) La prohibición, durante un período determinado, de tener contacto con las víctimas por ningún medio, incluidas las comunicaciones electrónicas;

b) La prohibición, durante un período determinado, de concurrir a ciertos lugares.

66. Este texto otorga plena discreción al juez para que tome una decisión acorde con las necesidades y la situación de las víctimas. Por ende, se podrá prohibir al autor del delito acercarse a escuelas, gimnasios o cualquier otro lugar de trabajo, de esparcimiento o de presencia (incluido evidentemente el domicilio) frecuentado por las personas contra las que haya ejercido la violencia. Dicha prohibición es aplicable en las distintas fases del procedimiento iniciado debido a un acto violento:

a) Como medida de emergencia adoptada por el fiscal en la etapa de la investigación preliminar;

b) Como medida adoptada por el juez de instrucción para proteger a las víctimas durante el proceso de investigación;

c) Como pena complementaria a una condena principal.

67. En el marco más concreto del procedimiento penal, cabe señalar que el mecanismo legal busca el acompañamiento de la víctima desde la fase de investigación e instrucción, permitiendo que el fiscal general o el juez de instrucción ordenen la realización de un informe médico psicológico para determinar la naturaleza del perjuicio sufrido y la necesidad de poner en marcha un programa de cuidados adecuados.

68. De conformidad con los estándares internacionales en la materia, la citada Ley núm. 1.382, de 20 de julio de 2011, prevé que se imparta una formación obligatoria (véase la respuesta a la cuestión 4 relativa a la formación).

Atención de las víctimas de la violencia: el papel de la Dirección de la Acción y la Ayuda Social

69. En el Principado de Mónaco, la atención de las mujeres víctimas de la violencia está a cargo, entre otras entidades, de la Dirección de la Acción y la Ayuda Social.

70. Dos asistentes sociales polivalentes realizan turnos de guardia en los que atienden a las personas que afrontan problemas.

71. Los asistentes sociales reciben a las personas víctimas de la violencia o a niños testigos de actos de violencia, a los que proporcionan diversos tipos de información.

72. Su labor consiste asimismo en lo siguiente:

a) Ayudar a las mujeres a expresar sus vivencias;

b) Informarlas de sus derechos;

c) Evaluar la situación con el fin de proponer medidas de apoyo adecuadas.

73. Los asistentes sociales polivalentes suelen atender a personas extranjeras, y se expresan tanto en francés como en inglés.

74. Se ponen a disposición de las víctimas los textos de las leyes en vigor, un folleto con las direcciones y señas de contacto de los distintos servicios de ayuda y apoyo del Principado, y un folleto de la Association des Victimes d'Infractions Pénales (Asociación de Víctimas de Infracciones Penales).

75. La Dirección de la Acción y la Ayuda Social puede proporcionar:

- a) Ayudas económicas;
- b) Alojamiento (dispone de plazas de alojamiento reservadas para casos de emergencia social y, cuando no están disponibles, propone otra solución (como el alojamiento en centros hoteleros u otras posibilidades));
- c) Asistencia psicológica (cuenta con los servicios de una psicóloga que presta apoyo a las víctimas de la violencia);
- d) Ayuda para la inserción profesional (un educador especializado puede ayudar a la persona afectada a buscar un empleo, en colaboración con el Servicio de Empleo).

76. En cuanto a la protección de la infancia, dicha Dirección puede:

- a) Emitir notificaciones (el organismo es responsable de realizar investigaciones de evaluación de los niños en situaciones de riesgo);
- b) Poner en marcha procedimientos de seguimiento familiar (sobre la base de que las familias estén de acuerdo) y medidas de asistencia educativa (Acción Educativa en Régimen Abierto), ordenadas por el juez tutelar. En ese contexto, los trabajadores sociales se encuentran asiduamente con problemas de violencia doméstica.

77. Gracias a la proximidad geográfica, el equipo de trabajadores sociales de la Dirección de la Acción y la Ayuda Social puede trabajar en red con:

- a) Los servicios hospitalarios y ambulatorios (la Unidad de Psiquiatría y de Psicología Médica “La Roseraie”, el Centro Plati y el servicio médico y psicológico para niños y adolescentes), que dependen de la Dirección de la Acción Sanitaria;
- b) El conjunto de agentes sociales de las distintas entidades responsables (servicios judiciales, policía, ayuntamiento, cajas sociales y otros), así como con el sector asociativo.

78. Por otra parte, los oficiales y los agentes de la policía judicial informan verbalmente y por cualquier otro medio a las personas víctimas de la violencia de su derecho a:

- a) Obtener una reparación por el perjuicio sufrido;
- b) Constituirse en parte civil en caso de que la fiscalía inicie un proceso, citar directamente al autor de los hechos ante el órgano jurisdiccional competente o presentar una denuncia ante el juez de instrucción;
- c) Recibir ayuda de los funcionarios de los servicios del Estado expresamente encargados de ello o de una asociación acreditada de ayuda a las víctimas.

79. A tales efectos, los policías entregan a las víctimas una documentación cuyo contenido haya sido aprobado mediante una orden ministerial.

80. Los establecimientos hospitalarios, públicos o privados, y los consultorios médicos establecidos en el Principado de Mónaco pueden consultar dicha documentación, libremente y de forma anónima.

81. Las personas con discapacidad víctimas de tales actos de violencia tienen derecho a acceder a la totalidad de esa información en un formato adaptado a su discapacidad.

Estadísticas de los actos violentos cometidos contra las mujeres

Número de penas de prisión firme

82. En 2014 se impusieron seis penas de prisión firme:

a) Una pena de 10 días (art. 236 del Código Penal - violencia o agresiones que provoquen más de 8 días de incapacidad total para trabajar);

b) Una pena de 15 días (art. 236 del Código Penal - violencia o agresiones que provoquen más de 8 días de incapacidad total para trabajar);

c) Una pena de un mes (art. 238 del Código Penal - violencia o agresiones que provoquen, como máximo, ocho días de incapacidad total para trabajar);

d) Dos penas de dos meses (una por infracción del art. 236 del Código Penal – violencia o agresiones que provoquen más de ocho días de incapacidad total para trabajar y una por infracción del art. 167 del Código Penal – violencia contra una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de una misión de servicio público - agente del servicio de seguridad pública de sexo femenino);

e) Una pena de cinco años dictada por el Tribunal Penal (art. 262 del Código Penal–violación).

83. En 2015 se impusieron siete penas de prisión firme:

a) Una pena de 15 días (art. 238 del Código Penal – violencia o agresiones que provoquen, como máximo, 8 días de incapacidad total para trabajar);

b) Dos penas de 20 días (art. 236 del Código Penal – violencia o agresiones que provoquen más de 8 días de incapacidad total para trabajar);

c) Una pena de un mes (art. 243, párr. 1, del Código Penal – violencia contra una persona menor de 16 años que provoque, como máximo, ocho días de incapacidad total para trabajar);

d) Tres penas de tres meses, dos de ellas con prohibición de ponerse en contacto con las partes civiles (una durante un año y otra durante tres meses) – (una por infracción del art. 167 del Código Penal – violencia contra una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de una misión de servicio público – agente del servicio de seguridad pública de sexo femenino y dos por infracción del art. 239 del Código Penal – violencia o agresiones contra el cónyuge u otra persona que viva habitualmente en su domicilio (que provoquen, como máximo, ocho días de incapacidad total para trabajar)).

Número de penas de prisión con remisión condicional

84. En 2014 se impusieron nueve penas de este tipo:

a) Una pena de ocho días (art. 238-1 del Código Penal – violencia contra el cónyuge que no acarree incapacidad total para trabajar);

b) Tres penas de un mes (art. 238 del Código Penal – violencia o agresiones que provoquen, como máximo, ocho días de incapacidad total para trabajar);

c) Dos penas de dos meses (una por infracción del art. 239 del Código Penal – violencia o agresiones contra el cónyuge u otra persona que viva habitualmente en su domicilio (que provoquen, como máximo, ocho días de incapacidad total para trabajar) y una por infracción del art. 238 del Código Penal – violencia o agresiones que provoquen, como máximo, ocho días de incapacidad total para trabajar);

d) Dos penas de tres meses; a una de ellas se le añaden tres años en régimen de libertad vigilada con la obligación de indemnizar a la víctima (una por infracción del art. 236 del Código Penal – violencia o agresiones que provoquen más de ocho días de incapacidad total para trabajar y una por infracción del art. 167 del Código Penal - violencia contra una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de una misión de servicio público);

e) Una pena de ocho meses, a la que se añaden tres años en régimen de libertad vigilada con obligaciones (art. 239 del Código Penal – violencia o agresiones contra el cónyuge u otra persona que viva habitualmente en su domicilio que provoquen, como máximo, ocho días de incapacidad total para trabajar).

85. En 2014 se impusieron diez penas de este tipo:

a) Tres penas de ocho días (una por infracción del art. 238 del Código Penal – violencia o agresiones (que provoquen, como máximo, ocho días de incapacidad total para trabajar) y dos por infracción del art. 239 del Código Penal – violencia o agresiones contra el cónyuge u otra persona que viva habitualmente en su domicilio (que provoquen, como máximo, ocho días de incapacidad total para trabajar);

b) Dos penas de 15 días (art. 238 del Código Penal – violencia o agresiones (que provoquen, como máximo, 8 días de incapacidad total para trabajar)), una de ellas con una multa de 1.500 euros;

c) Dos penas de tres meses de prisión, a una de ellas se le añaden cinco años en régimen de libertad vigilada con la obligación de someterse a medidas de tratamiento o atención médica, que pueden incluir la hospitalización, y la de trabajar o adquirir una formación, así como la prohibición de tener contacto con una de las víctimas (una por infracción del art. 239 del Código Penal – violencia o agresiones contra el cónyuge u otra persona que viva habitualmente en su domicilio (que provoquen, como máximo, ocho días de incapacidad total para trabajar) y una por infracción del art. 243, párr. 1, del Código Penal - violencia contra una persona menor de 16 años que provoque, como máximo, ocho días de incapacidad total para trabajar);

d) Una pena de seis meses, a la que se añaden tres años en régimen de libertad vigilada (art. 239 del Código Penal – violencia o agresiones contra el cónyuge u otra persona que viva habitualmente en su domicilio que provoquen, como máximo, ocho días de incapacidad total para trabajar);

e) Una pena de siete meses, a la que se añaden tres años en régimen de libertad vigilada con la obligación de indemnizar a la víctima (art. 239 del Código Penal – violencia o agresiones contra el cónyuge u otra persona que viva habitualmente en su domicilio que provoquen, como máximo, ocho días de incapacidad total para trabajar);

f) Una pena de 12 meses, a la que se añaden tres años en régimen de libertad vigilada (art. 238-1 del Código Penal – violencia contra el cónyuge que no acarree incapacidad total para trabajar, con la obligación de someterse a medidas de tratamiento o atención médica, que pueden incluir la hospitalización).

Número de multas impuestas

86. En 2014 se impusieron multas en tres sentencias:

a) Tres multas de 800 euros (una por infracción del art. 236 del Código Penal – violencia o agresiones que provoquen más de ocho días de incapacidad total para trabajar y dos por infracción del art. 238 del Código Penal – violencia o agresiones que provoquen, como máximo, ocho días de incapacidad total para trabajar);

b) Una multa de 600 euros (art. 236 del Código Penal – violencia o agresiones que provoquen más de ocho días de incapacidad total para trabajar);

c) Una multa de 400 euros (art. 236 del Código Penal – violencia o agresiones que provoquen más de ocho días de incapacidad total para trabajar).

87. En 2015 se impuso una multa.

Trata y explotación sexual

10. **Sírvanse facilitar información sobre las medidas encaminadas a combatir y prevenir la trata y la explotación sexual de las mujeres y las niñas. Enumeren las medidas adoptadas para capacitar a todo el personal pertinente, incluidos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los oficiales de fronteras, para la identificación de las víctimas de la trata, e indiquen si se prevé aprobar un plan integral de acción nacional contra la trata de personas. Proporcionen información sobre las extradiciones realizadas por el Estado parte relacionadas con el delito de la trata de personas, como se menciona en el párrafo 118 del informe. Sírvanse facilitar información sobre las medidas concretas adoptadas para alentar a las víctimas a denunciar los casos de trata y sobre los recursos jurídicos previstos y los servicios de apoyo que se les presta. Expliquen si el Estado parte tiene previsto conceder una protección especial, como permisos de residencia temporal, a las víctimas de la trata, aun cuando no quieran o no puedan cooperar con las autoridades judiciales. Asimismo, indiquen si el Estado parte da prioridad a la rehabilitación de las víctimas antes que a su repatriación a sus países de origen. Indiquen también en qué medida las mujeres y las niñas se dedican a la prostitución en el Estado parte, incluyendo datos desglosados por edad y nacionalidad. Aporten información sobre el apoyo prestado a las mujeres y las niñas que desean abandonar la prostitución y los programas de ayuda previstos a tal efecto.**

88. El Principado de Mónaco no es ajeno a los fenómenos de la prostitución y el proxenetismo. No obstante, se trata de casos poco habituales. Evidentemente, cuando ese tipo de hechos son descubiertos, son enjuiciados y castigados de conformidad con las leyes vigentes.

89. Hay dos organismos en la Dirección de Seguridad Pública con capacidad de ocuparse de los casos relacionados con la prostitución de mujeres o niñas: la Sección de Lucha contra la Delincuencia Organizada de la División de la Policía Judicial y la Sección de Menores y de la Protección Social de la División de la Policía Administrativa.

90. Los funcionarios que se ocupan de estos casos reciben capacitación a ese respecto en su formación inicial o en el marco de la formación continua, tanto sobre las audiencias y los interrogatorios en los que participan las personas afectadas por esos casos como sobre la atención social, médica y psicológica necesaria. Este año se han organizado varias sesiones de formación sobre la violencia familiar, la violencia doméstica y la violencia en general contra personas vulnerables.

91. En el terreno jurídico, cabe destacar las siguientes disposiciones:

a) La incitación a la prostitución es un delito tipificado en el artículo 421 del Código Penal: “Toda persona que por medio de gestos, palabras, escritos o por cualquier otro medio haya incitado públicamente al libertinaje a otras personas, sean de uno u otro sexo, será castigada con una pena de 1 a 5 días de prisión y/o con una multa de 200 a 600 euros”;

b) El proxenetismo y otros delitos análogos de carácter sexual están tipificados en los artículos 265 y siguientes del Código Penal.

92. El artículo 268 del Código Penal establece lo siguiente:

“Serán consideradas proxenetas y castigadas con una pena de seis meses a tres años de prisión y la multa prevista en la cifra 3 del artículo 26 todas las personas que, en la forma que fuere:

1) Contraten, obliguen o disuadan a una persona para que practique la prostitución, o ejerzan sobre ella una presión para que se prostituya o continúe haciéndolo;

2) Ayuden, asistan o protejan la prostitución de otra persona;

3) Participen en los beneficios de la prostitución o reciban a sabiendas en cualquier forma aportaciones de personas que practican la prostitución;

4) No puedan justificar los recursos correspondientes a su nivel de vida y mantengan al mismo tiempo relaciones habituales con una o varias personas que ejerzan la prostitución.

Se asimila al proxenetismo y será castigado con las mismas penas el hecho, cometido por cualquiera forma, de:

1) Hacer de intermediario entre dos personas, de las cuales una se dedica a la prostitución y la otra explota o remunera la prostitución ajena;

2) Facilitar a un proxeneta la justificación de recursos ficticios.”

93. La Dirección de Seguridad Pública, en colaboración con los servicios franceses, como la Oficina Central de Represión de la Trata de Seres Humanos, y con organizaciones supranacionales, como la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), procura recabar información e identificar a los miembros de las redes de prostitución.

94. En cuanto a las condenas, cabe citar como ejemplo la sentencia dictada por el Tribunal Correccional el 3 de abril de 2001, condenando a dos hombres a penas de tres años de prisión y 30.000 francos de multa por proxenetismo y complicidad en el proxenetismo.

95. En relación con la información y el apoyo a las mujeres víctimas de la violencia o el hostigamiento en el contexto de la prostitución o de la trata, el Principado cuenta con suficientes medios jurídicos, asociativos, institucionales y sociales para poder ocuparse de las posibles víctimas de manera inmediata. Cabe citar especialmente dos asociaciones muy activas a este respecto: la Association des Victimes d’Infractions Pénales y GenderHopes.

Participación en la vida política y pública

11. **Sírvanse proporcionar información sobre la labor que realiza el Estado parte para aumentar la participación en pie de igualdad de las mujeres en cargos superiores de la administración pública y del poder judicial y, en**

particular, en el Tribunal Supremo, el Tribunal de Revisión, el Consejo Nacional y el Consejo Municipal.

96. Como se señaló en el informe nacional, las mujeres participan plenamente en la toma de decisiones, como se evidencia en el número de mujeres que ocupan cargos de responsabilidad.

97. Ese nivel de participación se debe, en gran medida, a la igualdad de acceso a la educación y a las medidas adoptadas por el Gobierno del Principado para favorecer la conciliación de la vida privada y la vida familiar.

98. Las autoridades del país tienen la intención de continuar aplicando la política establecida en estas esferas.

Nacionalidad

12. En el informe se señala que la aprobación, en diciembre de 2011, de la Ley núm. 1.387, por la que se modifica la Ley núm. 1.155, relativa a la nacionalidad, constituye un avance significativo hacia la consecución de la igualdad de género en la transmisión de la nacionalidad (párrs. 170 a 176). Sírvanse explicar cómo han contribuido las nuevas modificaciones a prevenir los casos de niños apátridas, dado que las personas divorciadas que adquirieron la nacionalidad monegasca por matrimonio no pueden transmitirla a sus hijos nacidos después del divorcio ni a su futuro cónyuge.

99. De conformidad con la Ley núm. 1.387, de 11 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Ley núm. 1.155, de 18 de diciembre de 1992, la persona divorciada que haya adquirido la nacionalidad por matrimonio no podrá transmitirla a los hijos nacidos posteriormente ni a su futuro cónyuge. Por lo tanto, para evitar casos de niños apátridas, el cónyuge extranjero que haya adquirido la nacionalidad monegasca por matrimonio deberá conservar su nacionalidad de origen.

Educación

13. En el informe se señala que las niñas y los niños tienen igual acceso a una educación de calidad y que la educación es obligatoria entre los 6 y los 16 años para los niños de nacionalidad monegasca o cuyos padres o representantes legales residan o estén legalmente establecidos en el Estado parte (párrs. 178 a 180). Sírvanse indicar qué medidas se han adoptado para integrar a las niñas y los niños migrantes en el sistema nacional de enseñanza y qué iniciativas se están emprendiendo para modificar la ley, a fin de garantizar la educación gratuita de los niños migrantes cuyos padres o representantes legales no residan ni estén legalmente establecidos en el Estado parte.

100. Cabe señalar que el Principado no es un país de migraciones. Sin embargo, algunas personas que tienen el estatuto de refugiados residen en Mónaco.

101. A petición del Príncipe Soberano, en los últimos años Mónaco participa en la acogida de familias de refugiados que provienen de Oriente Medio.

102. En ese contexto, a finales de 2016, un niño y una niña se incorporaron en centros escolares del Principado. Dichos alumnos se integraron en una clase de sexto grado con el francés como lengua extranjera.

103. Se ha adaptado su horario escolar teniendo en cuenta su total desconocimiento del francés. A fin de ayudarles a aprenderlo, un profesor, que conoce el idioma árabe, les imparte clases particulares de francés, tres veces por semana. Esas clases sirven de refuerzo a las clases de francés como lengua extranjera que se les imparte en el centro de enseñanza secundaria al que asisten.

104. La Dirección de Educación Nacional, Juventud y Deportes sufraga los gastos que conlleva la escolarización (libros de texto y material escolar, uniformes deportivos, comedor escolar y, en enero de 2017, las clases de práctica del esquí).

105. Además de una orientación específica en el ámbito pedagógico, es necesario que el equipo docente en su conjunto realice un seguimiento particular del proceso de integración de dichos adolescentes. Se ha capacitado especialmente a ese respecto al equipo psicosocial y al enfermero escolar.

106. El profesor que conoce el idioma árabe informa semanalmente de los progresos de esos alumnos en el aprendizaje del francés y, además, dado que es una de las pocas personas que puede comunicarse con ellos más ampliamente, también informa de cómo están viviendo su particular situación.

107. Estos dos niños se han integrado satisfactoriamente en su centro escolar y se han podido añadir clases complementarias a su horario escolar inicial. En el próximo curso, seguirán el horario de la clase de quinto grado, en la que se matricularán, y continuarán con el curso de francés como lengua extranjera.

108. Además, a petición de la Dirección de Educación Nacional, uno de esos adolescentes ha sido aceptado en la Escuela Superior de Artes Plásticas, donde estudia dibujo. El otro participa en algunas actividades organizadas por el Centro para Jóvenes Princesa Estefanía.

14. Faciliten datos, desglosados por sexo y ámbito de estudio, sobre las tasas de matriculación de las mujeres y los hombres en la educación terciaria en el Estado parte y en el extranjero. Asimismo, aporten información sobre la presencia de la mujer en puestos de liderazgo de instituciones académicas, además de datos desglosados por sexo sobre el número de mujeres que ocupan puestos administrativos y académicos superiores en todos los niveles del sistema educativo.

109. Véanse los anexos.

Empleo

15. En el informe se afirma que no se practica discriminación alguna en la remuneración, la contratación o el despido, ni en el sector público ni en el sector privado (párr. 219). Sírvanse proporcionar información sobre la situación de facto de las mujeres en el mercado de trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, y sobre la forma en que el Estado parte supervisa la aplicación de las leyes que regulan ambos sectores. Informen también sobre las medidas concretas adoptadas para hacer frente a la discriminación en la contratación y en los ascensos y a las desigualdades salariales en el sector privado. Indiquen si se ha realizado algún estudio para evaluar los efectos del trabajo a tiempo parcial, las modalidades de trabajo flexible y el teletrabajo (cuya introducción se está analizando) en la promoción profesional y las pensiones de jubilación de las mujeres.

110. En general, la Inspección del Trabajo es el organismo encargado de hacer cumplir la legislación en materia de derecho del trabajo, así como en lo tocante a la salud y la seguridad en el trabajo.

111. En cuanto a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, el artículo 2-1 de la Ley núm. 739, de 16 de marzo de 1963, sobre el salario, modificada por las Leyes núm. 948, de 19 de abril de 1974, y núm. 1.068, de 28 de diciembre de 1983, establece el principio de igualdad, y el artículo 2-2 establece la nulidad de toda disposición que conlleve una discriminación entre hombres y mujeres en materia de remuneración.

112. El artículo 2-3 establece que los dos artículos citados y los reglamentos relativos a su aplicación deben figurar en un lugar visible en todos los establecimientos que empleen a mujeres, en los lugares de trabajo y en los locales de contratación.

113. Por lo tanto, todos los asalariados, independientemente de su sexo, deben recibir una remuneración igual por un trabajo igual o un trabajo de igual valor, entendiéndose por remuneración el salario y todos los beneficios y prestaciones suplementarios, directos o indirectos, en efectivo o en especie, que lleve aparejados. Por consiguiente, hay que calcular los distintos elementos que constituyen la remuneración con arreglo a normas idénticas para todos los asalariados, sin distinción de sexo.

114. Las categorías y los criterios de clasificación y de promoción profesional y todas las demás bases para el cómputo de la remuneración deben ser los mismos para los asalariados de ambos sexos.

115. El inspector de trabajo puede exigir que se le comuniquen los distintos elementos que sirven para determinar las remuneraciones en la empresa y, en particular, las normas, las categorías, los criterios y las bases de cálculo citados en el artículo 2-1 (Real Orden núm. 5.392, de 4 de julio de 1974, en aplicación de la Ley núm. 948, de 19 de abril de 1974, que completa y modifica lo dispuesto acerca de la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres en la Ley núm. 739, de 16 de marzo de 1963, sobre el salario).

116. Es posible que, en el futuro, se encargue un estudio sobre la remuneración de los hombres y las mujeres al Instituto Monegasco de Estadística y Estudios Económicos.

16. El Comité observa que el Decreto-ley núm. 399 de 1944, por el que se autoriza la creación de un sindicato si la mayoría de sus miembros son de nacionalidad monegasca o francesa, sigue en vigor, a pesar de que más del 90% de los empleados en el sector privado son extranjeros, y entre ellos hay muchas mujeres. Sírvanse indicar si el Estado parte tiene previsto revisar ese Decreto-ley, con miras a modificarlo para que los empleados de todas las nacionalidades tengan derecho a afiliarse a un sindicato. El Comité observa también que, en virtud del artículo 6 de la Ley núm. 729, de 16 de marzo de 1963, se permite el despido sin motivo, y que esa disposición se ha utilizado para despedir de forma arbitraria a trabajadoras extranjeras poco después de su licencia de maternidad.

117. No se descarta que, en el futuro, se examine la posible modificación del Decreto-ley núm. 399.

118. Con respecto a la Ley núm. 729 de 1963, cabe recordar que la Inspección del Trabajo vela por el respeto de la legislación laboral. Además, toda persona tiene el derecho de recurrir a la justicia. Por otra parte, como se ha indicado más arriba, se pueden presentar denuncias ante el Alto Comisionado para la Protección de los Derechos, las Libertades y la Mediación.

Salud

17. Sírvanse aportar información sobre si se imparte una educación adecuada a la edad sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, y sobre comportamiento sexual responsable, en el Estado parte. Sírvanse indicar también qué campañas de sensibilización se están realizando sobre la prevención del VIH/SIDA. En el párr. 241 del informe se exponen los tres casos en los que se prevé una interrupción médica del embarazo. Indiquen si existen disposiciones legales que despenalicen el aborto en todos los casos. Faciliten

información sobre la disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva y el acceso a ellos, incluidos los métodos anticonceptivos modernos y la prestación de servicios de atención posaborto en todos los casos.

Educación sobre salud

119. Como se indica en el informe inicial, la educación en materia de higiene y salud prevista en la Ley núm. 1.334 sobre la educación va acompañada de múltiples actividades de concienciación y prevención en las escuelas, en las que participan los alumnos de todos los niveles educativos.

120. Esas actividades, que están adaptadas a la edad de los alumnos, abarcan numerosos ámbitos y su propósito es garantizar que los niños vivan en un entorno saludable, desde su nacimiento hasta la vida adulta.

121. Los programas de educación sobre salud incluyen temas tales como la alimentación, el sueño o la actividad física. En la adolescencia, se tratan también otras cuestiones, como las adicciones, la seguridad vial, los peligros de Internet, la sexualidad y las prácticas deportivas de riesgo, entre otras.

122. En ellos participan múltiples actores: los alumnos, los padres de alumnos, el personal docente, la Dirección de Seguridad Pública, la Dirección de la Acción Sanitaria, la Cruz Roja, algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras partes interesadas.

123. La educación sexual y reproductiva está integrada en los planes de estudio, en las asignaturas de ciencias de la vida y de la tierra.

124. Todos los años se llevan a cabo actividades de concienciación para combatir las infecciones de transmisión sexual dirigidas a los estudiantes de enseñanza secundaria, en colaboración con algunas asociaciones monegascas, como Fight AIDS Monaco, cuya Presidenta es Su Alteza Serenísima la Princesa Estefanía.

125. Durante los tres cursos de enseñanza secundaria, también se organizan reuniones informativas, talleres, mesas redondas y charlas con médicos, así como actividades interactivas, para recordar a los estudiantes los peligros, los medios de prevención y sus derechos.

Interrupción médica del embarazo y acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva

126. La ley núm. 1.359, de 24 de abril de 2009, permite la interrupción médica del embarazo en tres casos concretos, esto es, cuando:

- a) El embarazo entrañe un riesgo para la vida o la salud física de la mujer encinta;
- b) Los exámenes prenatales y los demás datos médicos demuestren una gran probabilidad de que el feto tenga anomalías graves e insuperables o una afección incurable que amenace su vida;
- c) Haya una presunción suficiente en el sentido de que el embarazo es consecuencia de un acto delictivo y hayan transcurrido menos de 12 semanas contadas desde el principio del embarazo.

127. Además, se ha establecido el Centro de Coordinación Prenatal y Apoyo Familiar, que tiene por objeto prestar a la embarazada y a su familia la información y el apoyo que necesiten durante el embarazo y hasta el nacimiento, especialmente cuando la embarazada afronte dificultades físicas, psicológicas o sociales relacionadas con su estado.

Acceso a prestaciones sociales

18. En el informe se indica que el cabeza de familia recibe el pago de las prestaciones familiares que corresponden a los hijos según el régimen de prestaciones familiares, y que casi siempre se considera cabeza de familia al hombre (párr. 256). Sírvanse señalar qué medidas prevé adoptar el Estado parte para eliminar la discriminación contra la mujer en la determinación del cabeza de familia y para asegurar que las mujeres y los hombres compartan las responsabilidades familiares en pie de igualdad. Indiquen también las medidas que se están adoptando para garantizar que las mujeres migrantes tengan acceso a la protección y las prestaciones sociales. Dado que la legislación del Estado parte no contiene ninguna disposición que impida a las mujeres acceder a préstamos bancarios, hipotecas u otras formas de crédito (párr. 261), faciliten datos, desglosados por sexo, sobre el número de mujeres y hombres que son beneficiarios de esos créditos.

Concepto del cabeza de familia

128. Efectivamente, en la mayoría de los casos se considera como cabeza de familia al hombre.

129. No obstante, cabe señalar que la Ley núm. 595, de 15 de julio de 1954, que fija el régimen de prestaciones familiares, prevé específicamente la posibilidad de que esas prestaciones sean otorgadas a la madre.

130. Esta cuestión suscita una preocupación constante sobre la que se celebran debates.

Acceso a los préstamos bancarios

131. El Gobierno del Principado no dispone de datos sobre la concesión de créditos.

Mujeres desfavorecidas

19. Sírvanse proporcionar información detallada sobre las formas de discriminación interseccional a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad, las migrantes y las personas que viven con el VIH, e indiquen qué medidas se aplican para eliminar ese tipo de discriminación, en particular en las esferas de la educación, el empleo, la salud y la participación en la vida política y pública.

20. Expliquen también si las mujeres solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes y las mujeres y las niñas con discapacidad tienen un acceso efectivo a la justicia y a otros servicios, como los centros de acogida, los servicios sociales y el asesoramiento jurídico y psicológico.

132. En el marco de su compromiso con los derechos humanos, el Gobierno del Principado lleva a cabo una política activa en relación con los derechos de las personas con discapacidad y en favor de las personas afectadas por el VIH o el sida.

133. En el contexto de la discapacidad, cabe destacar a este respecto la aprobación, a finales de 2014, de la Ley núm. 1.410, relativa a la protección, la autonomía y la promoción de los derechos y las libertades de las personas con discapacidad, así como la aprobación, a finales de 2016, de la Ley núm. 1.441, relativa a la accesibilidad a las zonas construidas.

134. En cuanto al VIH y el sida, el Gobierno del Principado y las ONG monegascas adoptan medidas para combatir la enfermedad, proporcionar tratamiento a las personas afectadas y garantizar sus condiciones de vida. A este respecto, cabe

destacar el compromiso personal de Su Alteza Serenísima la Princesa Estefanía, por medio de su asociación Fights AIDS Monaco.

Matrimonio y relaciones familiares

21. En el informe se mencionan las disposiciones del artículo 274-1 del Código Penal relativas al matrimonio forzado. Sírvanse proporcionar información sobre la situación actual con respecto al matrimonio forzado en el Estado parte. En el informe se señala que el Gobierno estaba considerando la posibilidad de modificar la legislación relativa a la cuestión de la atribución del apellido, habida cuenta de que una mujer casada no puede dar su apellido a sus hijos, y que en mayo de 2015 se presentó al Consejo Nacional para su examen un proyecto de ley por el que se modifican las disposiciones pertinentes del Código Civil (párr. 282). Sírvanse proporcionar información actualizada sobre el estado del proyecto de ley, en particular sobre el plazo para su aprobación.

135. Efectivamente, el matrimonio forzado está definido en la Ley núm. 1.382, de 20 de julio de 2011, relativa a la prevención y la represión de determinados tipos de violencia. El artículo 16 de la Ley introduce un nuevo artículo 274-1 en el Código Penal, en el que se establece la nulidad del matrimonio, una pena de 3 a 5 años de prisión y una multa de 18.000 a 90.000 euros.

136. Dichas disposiciones nunca se han aplicado desde su aprobación.

137. La Ley que modifica algunas disposiciones del Código Civil relativas al apellido e introduce la cuestión del reconocimiento del niño antes de su nacimiento fue aprobada en diciembre de 2016 (Ley núm. 1.440).

138. Dicha Ley permite que los progenitores pongan a sus hijos el apellido del padre o, de común acuerdo, el de la madre.

139. La Ley también trata del reconocimiento del niño antes de su nacimiento e incorpora en el Código Civil disposiciones sobre el apellido de elección (nom d'usage).

22. Indiquen en qué circunstancias el Príncipe podrá conceder una dispensa sobre la edad para contraer matrimonio y cuántas veces se ejerció tal prerrogativa durante el período sobre el que se informa. Sírvanse indicar si está prevista una modificación de los artículos 126 a 129 del Código Civil, a fin de derogar la disposición discriminatoria por la cual una mujer no puede volver a casarse hasta pasados 310 días desde la disolución del matrimonio anterior.

140. El Código Civil establece que el Príncipe puede conceder una dispensa sobre la edad para contraer matrimonio por motivos graves cuando se trate de personas que tengan, al menos, 16 años de edad. El embarazo de la futura esposa puede ser uno de los motivos para solicitar dicha dispensa.

141. Hasta la fecha, la modificación de los artículos 126 a 129 del Código Civil no figura entre los asuntos prioritarios que están siendo examinados por los Servicios Jurídicos del Gobierno del Principado.

Enmienda al artículo 20 1) de la Convención

23. Sírvanse indicar si se han realizado progresos en lo que respecta a la aceptación de la enmienda al artículo 20 1) de la Convención, relativo al tiempo asignado a las reuniones del Comité.

142. Se proporcionará información sobre el procedimiento de aceptación de la enmienda al artículo 20 de la Convención durante el diálogo con el Comité que tendrá lugar en el último trimestre de 2017.
